

VI. CONFLICTOS VIOLENTOS Y RECURSOS NATURALES

*Michael Renner**

La abundancia de recursos naturales ha contribuido a alimentar los conflictos en un amplio abanico de países del mundo en desarrollo. Se trata de una serie de recursos que incluye el petróleo y el gas natural, minerales y metales, piedras preciosas, madera y productos agrícolas como el café, así como productos derivados de las drogas. Casi la cuarta parte de las aproximadamente cincuenta guerras y conflictos armados activos en los últimos años tienen un fuerte componente de recursos, en el sentido de que su explotación legal o ilegal contribuyó a desencadenar o exacerbar un conflicto violento o a financiar su continuación (ver la Tabla 1).¹

El coste humano de estos conflictos relacionados con los recursos es terrible. Según cálculos aproximados, en los años noventa perdieron la vida más de cinco millones de personas. Cerca de seis millones huyeron a países vecinos y entre once y quince millones fueron desplazados dentro de las fronteras de su propio país. Caudillos, gobiernos corruptos, traficantes de armas y dirigentes empresariales sin escrúpulos se benefician del pillaje y utilizan el dinero derivado del recurso correspondien-

* Michael Renner es investigador del Worldwatch Institute de Washington y director del proyecto *Vital Signs*. Autor de *The Economy of Resource Wars*, Worldwatch Paper N° 162, octubre de 2002. Traducción: Berna Wang.

¹ El autor calcula, basándose en los estudios existentes, que la cuarta parte de los conflictos tiene una dimensión relacionada con los recursos. El número de muertes se basa en datos de Milton Leitenberg, «Deaths in Wars and Conflicts Between 1945 and 2000», Center for International and Security Studies, Universidad de Maryland, ponencia para la *Conference on Data Collection in Armed Conflict*, Upsala, Suecia, 8-9 de junio de 2001.

te para armarse y llenarse los bolsillos. Pero, para la mayoría de las personas, estos conflictos significan el estancamiento del desarrollo e incluso el empobrecimiento, una vida rota y la muerte.²

Estos conflictos están estimulando el debate sobre la naturaleza de las guerras contemporáneas. Algunos analistas afirman que la importancia de los conflictos en los que la riqueza de recursos es un factor clave cuestiona teorías anteriores según las cuales la degradación del medio ambiente y la escasez de recursos son una fuente importante de violencia organizada. Una división similar ha surgido entre las escuelas de pensamiento que hacen hincapié en la «codicia» (la oportunidad de robar recursos) como desencadenante del conflicto, y las que creen que la raíz de éste es el «agravio» (las reivindicaciones no atendidas). Aunque no carecen de razones, existe el peligro de exagerar esas distinciones: los analistas corren el riesgo de proyectar una falsa dicotomía al ceñirse a la pureza académica, sin tener en cuenta las complejidades, contradicciones y causas múltiples de la mayoría de los conflictos.³

Las dimensiones de los conflictos

En algunos lugares —como Angola y Colombia—, el saqueo de materias primas ha prolongado guerras que inicialmente fueron desencadenadas por otros factores, como quejas no atendidas o luchas ideológicas. Cuando la rivalidad de la Guerra Fría llegó a su fin a finales de los años ochenta, gran parte del apoyo que antes prestaban las dos superpotencias a gobiernos y grupos rebeldes entre sus aliados del Tercer Mundo se evaporó. De ahí que las facciones en contienda dependan cada vez más de medios delictivos como la extorsión, la toma de rehenes, el

² Cifras de refugiados basadas en datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (www.unhcr.ch). El número de desplazados internos se basa en datos del US Committee for Refugees (www.refugees.org). Ambos de 25 de agosto de 2002.

³ Indra de Soysa, «The Resource Curse: Are Civil Wars Driven by Rapacity or Paucity?», en Mats Berdal y David M. Malone (Eds.), *Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado, 2000, pp. 113-136; Fred Pearce, «Blood Diamonds and Oil», *New Scientist*, 29 de junio de 2002, pp. 36-40; Karen Ballentine y Jake Sherman, «Introduction», y Karen Ballentine, «Beyond Greed and Grievance: Reconsidering the Economic Dynamics of Armed Conflict», ambos en Karen Ballentine y Jake Sherman (Eds.), *The Political Economy of Armed Conflict: Beyond Greed and Grievance*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado, 2003.

control monopolístico del comercio, el tráfico de drogas, la explotación de mano de obra forzada, la apropiación de ayuda humanitaria y la extracción y venta, a menudo ilícitas, de recursos naturales.⁴

Sin embargo, algunos conflictos relacionados con los recursos —como el de Sierra Leona, por ejemplo— tienen un origen diferente. La prodigalidad de la naturaleza atrae a grupos que a veces afirman que actúan debido a la opresión política o la negación de derechos a una minoría pero que, en realidad, son depredadores que tratan de enriquecerse por medio de la extracción ilegal de recursos. Inician la violencia no necesariamente para derrocar a un gobierno, sino para conseguir recursos lucrativos y conservar el control sobre ellos, que suelen ser una de las escasas fuentes de riqueza y poder en las sociedades más pobres. Les ayuda mucho el hecho de que numerosos países están debilitados por un gobierno precario o represivo, servicios públicos en proceso de deterioro, ausencia de oportunidades económicas y profundas divisiones sociales.

Una tercera dimensión de la relación entre recursos y conflictos se refiere a las repercusiones de la extracción comercial de recursos. Con frecuencia, los beneficios económicos de las operaciones mineras y madereras van a parar a las manos de una pequeña élite de empresarios o dirigentes del gobierno. Lo habitual es que no se consulte a la población local —que muchas veces son pueblos indígenas—, pero ésta termina soportando toda una serie de cargas (expropiación de tierras sin compensación adecuada, trastornos en los estilos de vida tradicionales y devastación del medio ambiente, incluida la destrucción de tierras cultivables, la tala de bosques y daños a los terrenos de caza y pesca). Esto ha desembocado en conflictos violentos en varios lugares, como algunas provincias de Indonesia y el delta del Níger, en Nigeria. En lugar de ser guerras con todas las de la ley, estos conflictos suelen caracterizarse porque se libran mediante escaramuzas de menor escala, controles de carretera, actos de sabotaje, represión y violaciones de derechos humanos.

⁴ El paso del patrocinio de las superpotencias a la explotación de recursos puede verse en Mark Duffield, «Globalization, Transborder Trade, and War Economies», en Berdal y Malone, *Op. Cit.*, p. 73. Entradas alternativas de ingresos en Mary Kaldor, *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*, Stanford University Press, Stanford, California, 1999, pp. 102-103 (en español, *Las nuevas guerras*, Tusquets, Barcelona, 2001) y en David Keen, «Incentives and Disincentives for Violence», en Berdal y Malone, *Op. Cit.*, pp. 29-31.

Gran parte de la violencia de los conflictos relacionados con los recursos está dirigida contra los civiles. Dado que establecer un control indiscutible sobre esos recursos es un objetivo clave, los grupos armados buscan intimidar a la población local para lograr su sometimiento o utilizan el terror para expulsarla. A diferencia de los movimientos basados en una ideología, quienes persiguen la riqueza de los recursos no compiten por «los corazones y las mentes» de la población local. Hay un círculo vicioso autoalimentado en el que el botín de la explotación de recursos financia la guerra y ésta proporciona los medios y las condiciones que permiten el acceso ilegítimo continuado a los recursos.⁵

Recursos, corrupción y mal gobierno

¿Por qué algunos países son propensos a los conflictos por recursos? Lo normal es que estos conflictos sean resultado de una combinación de factores políticos, sociales, económicos y militares. La abundancia de recursos puede tener consecuencias económicas negativas, pues los países dependen demasiado —y cada vez más— de ellos e invierten poco en áreas sociales fundamentales, como la educación y la salud. El resultado es que no se diversifica la economía ni se fomenta la innovación y el desarrollo de capacidades humanas. Las industrias de extracción de recursos tienden a tener características de «enclave», es decir, crean sólo pequeñas bolsas de riqueza y tienen pocas conexiones con el resto de la economía nacional. Con frecuencia, estos enclaves están separados incluso físicamente, pues los yacimientos petrolíferos y minerales suelen estar en zonas remotas.⁶

Cuanto más depende un país de la exportación de petróleo y de minerales, peor es la situación del desarrollo humano, concretamente en términos de mortalidad de menores de cinco años, esperanza de vida de recién nacidos y educación infantil. Y también cuentan con niveles de

⁵ Kaldor, *Op. Cit.*, pp. 90, 98–100; Keen, *Op. Cit.*, pp. 22, 24, 27; David Keen, «The Economic Functions of Violence in Civil Wars», *Adelphi Paper 320*, Oxford University Press para el International Institute for Strategic Studies, 1998.

⁶ Michael Ross, *Extractive Sectors and the Poor*, Oxfam América, octubre de 2001, pp. 5, 7; De Soysa, *Op. Cit.*, pp. 120, 121, 125, 126.

desigualdad entre ricos y pobres significativamente superiores a los de otros países con niveles de ingresos comparables.⁷

Esto no es una simple coincidencia. Las sociedades cuyos principales ingresos proceden de las regalías de sus recursos tienden a sufrir una gobernabilidad sumamente precaria: abunda la corrupción y la compra de favores, los bienes y servicios públicos están fuera del alcance de la mayoría y las instituciones del estado se debilitan deliberadamente para burlar a aquellos que podrían cuestionar al gobernante. Los ingresos del estado se desvían para generar enormes fortunas ilícitas para esos gobernantes y se emplean para pagar favores a simpatizantes clave del régimen. Dado que estos regímenes dependen menos de los ingresos derivados de un sistema tributario de base amplia, también necesitan menos la legitimidad popular y se sienten menos presionados para rendir cuentas.⁸

La asignación de concesiones mineras y de otros recursos a simpatizantes del régimen es, al mismo tiempo, un plan para la corrupción y el enriquecimiento privado y un mecanismo crucial para convertir los recursos en dinero en efectivo. Éste ayuda a sostener al régimen en el poder mediante la compra de armas y el mantenimiento de las Fuerzas Armadas. Muchos gobiernos de países ricos en recursos gastan una proporción muy elevada de los ingresos del estado en seguridad interna, para reprimir los movimientos democráticos u otros desafíos a su poder.⁹

En estas situaciones, los gobernantes suelen fomentar y manipular los conflictos entre diferentes comunidades, facciones y grupos étnicos como medio para mantener el control. Sin embargo, esto intensifica las fricciones en el seno de la sociedad: los grupos descontentos y ofendidos recurren de forma creciente a las protestas y en ocasiones a la violencia; surgen rivales que cuestionan a los líderes desprestigiados y emprendedores político-criminales implacables, que ven una oportunidad para robar recursos y utilizan la violencia para alcanzar su objetivo.

⁷ Ross, *Op. Cit.*, pp. 8, 11, 12.

⁸ William Reno, «Shadow States and the Political Economy of Civil Wars», en Berdal y Malone, *Op. Cit.*, pp. 45, 46, 56, 57 (ver en español «Economías clandestinas, violencia y estados en África», en Mariano Aguirre y Mabel González Bustelo (eds.), *Políticas mundiales, tendencias peligrosas. Anuario CIP 2001*, Icaria-CIP, Barcelona, 2001); De Soysa, *Op. Cit.*, pp. 120, 121, 125, 126; Philippe Le Billon, «The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts», *Political Geography*, N° 20, 2001, pp. 561-584.

⁹ Ross, *Op. Cit.*, pp. 13-14.

En un país con economía mal desarrollada y diversificada, en el que no existen normas democráticas, hacerse con el control de un recurso preciado es el billete más probable para llegar a la riqueza y el poder.¹⁰

La proliferación de armas y de combatientes

Sin el patrocinio de la Guerra Fría y bajo la creciente presión de los donantes occidentales para que se «aprieten el cinturón», muchos gobiernos de países en desarrollo ya no pueden mantener grandes ejércitos. Los soldados no cobran su salario o cobran salarios de miseria y, a menudo, recurren a otras fuentes de financiación, como el saqueo y la extorsión. Esta fragmentación es aún más probable cuando los gobernantes han creado deliberadamente fuerzas de seguridad rivales para que se controlen mutuamente. Algunos mandos militares se convierten en caudillos locales de hecho y crean feudos semicomerciales mineros, madereros o productores de droga.¹¹

Mientras tanto, aumentan las organizaciones de seguridad privadas, que incluyen fuerzas leales a los caudillos locales, grupos de auto-defensa ciudadana, fuerzas patrocinadas por las empresas, mercenarios extranjeros y bandas criminales. Durante los años noventa, algunas empresas militares privadas adquirieron importancia al ofrecer diversos servicios, entre ellos actividades mercenarias como la adquisición de armas y la dirección de operaciones de combate. Varios gobiernos en apuros —en Angola, Sierra Leona y Papúa Nueva Guinea— recurrieron a estas empresas para que les ayudaran a combatir a los grupos rebeldes, pagándoles con ingresos derivados de los recursos naturales o, en algunos casos, otorgándoles (a ellas o a sus filiales) concesiones de diamantes y otros recursos.¹²

¹⁰ Reno, *Op. Cit.*, pp. 47–53; Ian Smillie, Lansana Gberie y Ralph Hazleton, *The Heart of the Matter: Sierra Leone, Diamonds, and Human Security*, Partnership Africa Canada, Ottawa, enero de 2000, p. 15; Le Billon, *Op. Cit.*

¹¹ Kaldor, *Op. Cit.*, pp. 92-93; Le Billon, *Op. Cit.*

¹² Project Underground, «Militarization & Minerals Tour» (www.moles.org/Project_Underground/mil/intro.html), visitada el 6 de julio de 2001; Kim Richard Nossal, «Bulls to Bears: The Privatization of War in the 1990s» (www.onwar.org/warandmoney/index.html); International Alert, *The Privatization of Security: Framing a Conflict Prevention and Peacebuilding Policy Agenda*, Londres, mayo de 2001; Chaloka Beyani y Damian Lilly, *Regulating Private Military Companies*, International Alert, Londres, septiembre de 2001.

Las empresas multinacionales petroleras y mineras suelen contar con fuerzas de seguridad privadas para custodiar sus operaciones e instalaciones. En algunos casos, como Freeport-McMoRan en Indonesia, han subvencionado o ayudado a entrenar y a armar a las fuerzas de seguridad gubernamentales, o han puesto a su disposición equipos e instalaciones. Estas unidades han estado implicadas en graves violaciones de los derechos humanos.¹³

La proliferación masiva de armas pequeñas y ligeras desempeña un papel clave en esta situación. Los conflictos por los recursos se libran sobre todo con este tipo de armas porque son baratas, fáciles de conseguir, ocultar y pasar de contrabando, y fáciles de usar y mantener. Los cálculos evolucionan, pero se cree que existen en el mundo alrededor de 639 millones de armas pequeñas y ligeras. Cada año se fabrican entre 500.000 y un millón de armas de calibre militar y entre 10.000 y 14.000 millones de municiones para armas pequeñas.¹⁴ El tráfico de armas está estrechamente vinculado al comercio ilegal de materias primas como minerales y diamantes: las armas y las materias primas suelen viajar por las mismas rutas, en direcciones contrarias. Los ingresos procedentes de la venta de materias primas financian la compra de armas, munición, equipos militares, uniformes y otros artículos; a veces se cambian directamente armas por recursos naturales, drogas o productos animales, entre otros.¹⁵

Los daños al medio ambiente

La minería y la tala de árboles son muy destructivas para el medio ambiente, tanto por los métodos de extracción empleados como por el hecho de que las operaciones suelen realizarse en zonas ecológicamente frágiles. Estos impactos se sienten incluso en las mejores circunstan-

¹³ Información sobre Freeport-McMoRan en Abigail Abrash, «The Amungme, Kamoro & Freeport», *Cultural Survival Quarterly*, primavera de 2001, p. 40.

¹⁴ Michael Renner, *Small Arms, Big Impact: The Next Challenge of Disarmament*, Worldwatch Paper N° 137, Worldwatch Institute, Washington, octubre de 1997, pp. 10–12; los cálculos sobre el arsenal y producción proceden de Small Arms Survey, *Small Arms Survey 2003*, Oxford University Press, Nueva York, 2003, pp. 13, 57.

¹⁵ Renner, *Op. Cit.*, pp. 33-34; Small Arms Survey, *Small Arms Survey 2001*, Oxford University Press, Nueva York, 2001, pp. 107–08.

cias, pero son peores en las zonas de conflicto. Dado que gran parte de la extracción de recursos se hace de forma ilegal, y que los mineros y leñadores están decididos a extraer los recursos antes de que puedan perder el control sobre una zona, no existe ningún incentivo para que realicen sus operaciones de una forma responsable. Su principal interés es recaudar fondos y extraer todo lo posible con la mayor rapidez posible. En estas circunstancias, el valor duradero de preservar los tesoros biológicos y ecosistemas cruciales para el bienestar humano sale perdiendo, con demasiada facilidad, ante el impulso de explotar el pequeño espectro de riquezas naturales —minerales, metales y piedras preciosas— que se pueden convertir en dinero.¹⁶

La región oriental de la República Democrática del Congo, por ejemplo, sufre los efectos destructivos de varias guerras civiles desde mediados de los años noventa. Las batallas por el control de los yacimientos minerales, la minería ilegal generalizada, la tala de madera y la caza furtiva y la situación general de anarquía en gran parte del país han tenido un impacto devastador sobre el medio ambiente.¹⁷ Los parques nacionales se han visto gravemente afectados. El Parque Nacional de Kahuzi-Biega y la Reserva Natural de Okapi forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, una categoría que ensalza su valor único para toda la humanidad. La grave degradación del medio ambiente derivada de sucesos similares a la «fiebre del oro» los ha incluido en la lista de lugares en peligro de la organización. La caza furtiva de elefantes dejó sólo dos de las 350 familias de elefantes que vivían en Kahuzi-Biega en el año 2000. De modo similar, el número de gorilas de las tierras bajas orientales se ha reducido hasta el punto de que la especie está actualmente amenazada de extinción. Por otro lado, los mineros de coltán despojan de su corteza a los árboles *eko* para construir artesas con las que extraen el mineral de lodo metalífero, y han destruido miles de árboles en detrimento de los medios de vida de los indígenas locales, los mbutis, que utilizan estos árboles para cosechar miel.¹⁸

¹⁶ Terese Hart y Robert Mwinyihali, *Armed Conflict and Biodiversity in Sub-Saharan Africa: The Case of the Democratic Republic of Congo (DRC)*, Biodiversity Support Program, Washington, 2001, p. 12.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 14, 19, 21, 25.

¹⁸ UNESCO, «The World Heritage List» (www.unesco.org/whc/heritage.htm) y «World Heritage List in Danger» (www.unesco.org/whc/danglist.htm), ambas visitadas el 11 de agosto de 2001; Consejo de Seguridad de la ONU, «Report of the Panel of Experts

¿Hay respuestas para esta situación?

Desde finales de los años noventa está aumentando con rapidez la conciencia de los estrechos vínculos que unen la extracción ilegal de recursos, el tráfico de armas, los conflictos armados, las violaciones de derechos humanos, las catástrofes humanitarias y la destrucción del medio ambiente. Grupos de expertos creados por Naciones Unidas han investigado casos en Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo. Por su parte, grupos de la sociedad civil han lanzado una campaña contra los «diamantes de zonas de conflicto», procedentes de esos países, y también han arrojado luz sobre otros recursos de esas zonas de conflicto. Las prácticas empresariales y de la industria son sometidas ahora a un examen más minucioso.

El Consejo de Seguridad de la ONU, ante los graves conflictos de Sierra Leona, Liberia, Angola y el Congo, impuso varios embargos sobre el comercio ilícito de diamantes y las compras de armas, equipos y combustible pagadas con dinero procedente de la venta de esas piedras preciosas. Pero, con la excepción de la madera en Liberia, los demás recursos de zonas de conflicto no han atraído el mismo grado de atención. Y es evidente que productores, comerciantes, banqueros y gobiernos sin escrúpulos están violando las sanciones de la ONU. Existe una urgente necesidad de redoblar los esfuerzos internacionales para vigilar el cumplimiento de las sanciones y mejorar la capacidad para hacer cumplir los embargos e investigar las violaciones, para que los traficantes no puedan seguir actuando con impunidad.

Cada vez se dedica más energía a los esfuerzos para hacer más difícil que los recursos obtenidos gracias a los conflictos se vendan en los mercados mundiales. La industria del diamante es la que recibe más atención a este respecto. Desde el año 2000, representantes de 55 naciones, de la industria del diamante y de varias ONG llevaron a cabo negociaciones encaminadas a desarrollar un sistema de certificación

on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo», Nueva York, 12 de abril de 2001, pp. 10–12; «Miners' Rush for Coltan Threatens Rare Gorilla», *Environment News Service*, 13 de abril de 2001; «One Minute to Midnight for Great Apes», *The Ecologist*, julio-agosto de 2001, p. 15; Blaine Harden, «The Dirt in the New Machine», *The New York Times Magazine*, 12 de agosto de 2001.

mundial normalizada. Aunque el Proceso Kimberley (llamado así por la ciudad de Suráfrica donde se celebró la primera reunión) es un importante paso adelante, el plan tiene varios defectos fundamentales. Depende principalmente de la participación y respeto voluntario por parte de los gobiernos nacionales y de la industria, y se queda corto en cuanto a una vigilancia y cumplimiento efectivos. Por ejemplo, en una reunión celebrada en octubre de 2003, se adoptó un precario compromiso sobre la vigilancia que sustituyó a una propuesta para realizar exámenes independientes.¹⁹

También harán falta medidas efectivas para abordar otros recursos relacionados con conflictos. La Unión Europea está trabajando para dar mayor transparencia a sus importaciones de madera, por medio de un acuerdo para la aplicación del Plan de Acción sobre Cumplimiento de las Leyes Forestales, Gobernabilidad y Comercio (FLEGT, por sus siglas en inglés), un sistema de certificación voluntaria que se redactará a mediados de 2004. Según distintos cálculos, hasta la mitad de las importaciones de madera tropical de la UE son de origen ilegal y están relacionadas con conflictos armados o con la delincuencia organizada.²⁰

Un amplio abanico de empresas —compañías mineras, firmas comerciales, líneas aéreas y empresas de transporte, fabricantes y bancos— tiene algún grado de responsabilidad en los conflictos por los recursos de los últimos años. Esta responsabilidad va desde un papel activo (en el que las empresas están directa y conscientemente implicadas en la explotación ilícita de recursos) hasta la complicidad silenciosa (en la que las compañías hacen transacciones con regímenes represivos debido a los lucrativos contratos), pasando por un papel habilitador pasivo (en el que hacen pocas preguntas, en la cadena de suministros, sobre el origen de las materias primas o del dinero que se blanquea).

¹⁹ «Diamonds: Kimberley Process Reaches Breakthrough on Certification», *UN Wire*, 22 de marzo de 2002; Alan Cowell, «40 Nations in Accord on 'Conflict Diamonds'», *The New York Times*, 6 de noviembre de 2002; «Countries Adopt Monitoring Process for Conflict Diamonds», *UN Wire*, 31 de octubre de 2003. Para una exposición de sus debilidades principales, ver US Government Accounting Office, *Critical Issues Remain in Deterring Conflict Diamond Trade*, Washington, junio de 2002, pp. 17-21.

²⁰ Robin Pomeroy, «E.U. Bids to Cut Down Worldwide Illegal Timber Trade», *Reuters*, 21 de mayo de 2003; Jeremy Smith, «E.U. Aims to Stem Illegal Rainforest Timber Trade», *Reuters*, 14 de octubre de 2003.

Pero algunas empresas han rendido cuentas de sus actos. Una coalición de ONG lamentaba a finales de 2003, por ejemplo, que el Consejo de Seguridad y algunos gobiernos no hubieran emprendido acciones, en respuesta a los informes de un Grupo de Expertos de la ONU que había documentado cómo diversas empresas se habían beneficiado de la violencia en la República Democrática del Congo.²¹ Las campañas de las ONG han tirado de la manta de la complicidad con informes de investigación y «nombrando y avergonzando» a empresas concretas, en un intento de obligarlas a actuar de forma más ética o poner fin a sus operaciones en ciertos lugares. Estas campañas han tenido su máxima fuerza en el caso de empresas que venden productos de consumo muy visibles (especialmente diamantes) o cuyos logotipos o lemas son familiares para millones de personas.

El filántropo George Soros y una coalición integrada actualmente por más de 170 grupos de la sociedad civil de países desarrollados y en desarrollo lanzaron en el año 2002 una iniciativa llamada «Publique lo que paga» (*Publish What You Pay*). La campaña propone que se exija a las empresas que explotan recursos naturales, como condición para cotizar en las bolsas de valores y mercados financieros principales, que revelen todos los impuestos, comisiones, regalías y otros pagos que hacen a los gobiernos anfitriones. Esta medida arrojaría algo de luz sobre unas transferencias financieras normalmente opacas y aumentaría la rendición de cuentas respecto de la forma en que se emplean estos pagos.²²

El mismo año, el gobierno británico puso en marcha una Iniciativa para la Transparencia en las Industrias de Extracción, respaldada por decenas de países y empresas. Pero la Administración Bush y la industria petrolera de Estados Unidos han logrado desplazar el foco de aten-

²¹ Human Rights Watch, «D.R. Congo: U.N. Must Address Corporate Role in War», comunicado de prensa, 27 de octubre de 2003.

²² Forman parte de la coalición, entre muchos otros, Amnistía Internacional, Christian Aid, Amigos de la Tierra, Global Witness, Oxfam, Save the Children y Transparency International. George Soros, «Transparent Corruption», *Financial Times*, 13 de junio de 2002; Transparency International, «Press Release: George Soros and NGO's Call for Rules to Require Corporations to Disclose Payments». Ver: http://www.transparency.org/pressreleases_archive/2002/2002.06.13.publish_pay.html, visitada el 25 de junio de 2002; Ian Gary y Terry Lynn Karl, *Bottom of the Barrel: Africa's Oil Boom and the Poor*, Catholic Relief Services, Baltimore, junio de 2003, p. 6. Para más detalles y últimas novedades, ver www.publishwhatyoupay.org.

ción a pequeños proyectos piloto, rechazando las normas de obligatoriedad y trasladando la carga de la transparencia a los gobiernos de los países que producen recursos, en lugar de a las empresas privadas. Además, muchos gobiernos y empresas exigen que sólo se revele información global y no detallada.²³

Aunque Nigeria y Santo Tomé se comprometieron a mediados de 2003 a hacer públicos los detalles financieros de los próximos acuerdos petrolíferos en una zona conjunta del litoral, muchos otros gobiernos se han negado a adoptar medidas similares. En 2001, Angola amenazó con rescindir los contratos de British Petroleum (BP) si la empresa seguía adelante con sus planes de revelar información detallada sobre los pagos realizados al gobierno. Esta experiencia demuestra que la transparencia general sólo podrá implantarse mediante un programa global y obligatorio: las empresas no están dispuestas a mostrar sus libros de contabilidad si eso supone una amenaza de acabar con sus oportunidades de negocio.²⁴

Los recursos naturales seguirán alimentando conflictos mortíferos mientras las sociedades consumidoras importen y utilicen artículos con independencia de su origen y de las condiciones en que se fueron producidos. La educación de los consumidores, el activismo de los accionistas y las campañas a favor de las inversiones éticas pueden contribuir a alcanzar estos objetivos. Pero los gobiernos y las organizaciones internacionales tendrán que trabajar más arduamente para lograr una mayor transparencia de las empresas. Hasta ahora, las naciones occidentales han estado demasiado dispuestas a cerrar los ojos para proteger los intereses de sus empresas.

También harán falta acciones en otros frentes. Es esencial contrarrestar la proliferación masiva de armas pequeñas y eso sólo se puede lograr con una cooperación internacional amplia y un esfuerzo sostenido. Promover la democratización, la justicia y un mayor respeto de los derechos humanos son también tareas clave.

²³ Jeff Gerth, «U.S. and Oil Companies Back Revised Effort on Disclosure», *The New York Times*, 19 de septiembre de 2003; Gary y Karl, *Op. Cit.*, p. 54.

²⁴ Carola Hoyos, «Africans to Disclose Details of Oil Deals», *Financial Times*, 19 de junio de 2003; Christian Aid, *Fueling Poverty—Oil, War and Corruption*, Londres, 2003, p. 12; Gary y Karl, *Op. Cit.*, p. 53.

Otro desafío es facilitar la diversificación de las economías para alejarlas de la fuerte dependencia de las materias primas y orientarlas a una mezcla más amplia de actividades. Una economía más diversificada proporcionaría más equilibrio económico, reduciría la vulnerabilidad ante la «maldición de los recursos» y disminuiría las probabilidades de que los recursos naturales se conviertan en el objeto de una lucha por la riqueza y el poder entre contendientes despiadados. Invertir en desarrollo humano, mejorar los servicios médicos y educativos y proporcionar puestos de trabajo suficientes y oportunidades para el progreso social y económico contribuirá a reducir el riesgo de que los recursos naturales de un país se conviertan en su perdición. Esta inversión deben hacerla no sólo los gobiernos afectados, sino también el Banco Mundial y otras agencias de desarrollo multilaterales que han financiado con tanta generosidad proyectos petroleros, mineros y madereros. También debe ser una prioridad para los países ricos, que se han beneficiado durante mucho tiempo de la oferta de materias primas a bajo precio, mientras cerraban los ojos ante la destrucción en sus fuentes.

Tabla 1
Resumen de conflictos relacionados con los recursos

País (Protagonistas principales)	Recursos	Duración del conflicto
Colombia (Gobierno, rebeldes de las FARC y el ELN, paramilitares)	Petróleo, opio, coca	1984-actualidad
Perú (Gobierno, rebeldes de Sendero Luminoso)	Coca	1980-1995
Angola (Gobierno, rebeldes de UNITA)	Diamantes, petróleo	1975-2002
Angola (Gobierno, rebeldes de Cabinda)	Petróleo	1975-actualidad
Sierra Leona (Gobierno, rebeldes del RUF, otros)	Diamantes	1991-2000
Liberia (Gobierno, rebeldes de Charles Taylor / gobierno de Taylor, rebeldes del LURD)	Diamantes, madera, otros	1989-1996; 1999-2003
RD del Congo (Gobierno, diversos grupos rebeldes, Ruanda, Uganda, Zimbabue, Namibia)	Cobre, coltán, diamantes, oro, cobalto, café, madera, otros	1996-1997; 1998-actualidad
República del Congo	Petróleo	1997
Sudán (Gobierno, rebeldes del SPLA)	Petróleo	1983-actualidad
Afganistán (Fuerzas de ocupación soviéticas, rebeldes <i>muyahidin</i> , talibán)	Opio, piedras preciosas	1978-2001
Birmania (Gobierno, varios grupos rebeldes)	Madera, piedras preciosas, opio	1949-actualidad
Camboya (Gobierno apoyado por Vietnam, Jemeres Rojos)	Madera	1978-1997
Indonesia – Aceh (Gobierno, rebeldes del GAM)	Gas natural, madera	1975-actualidad
Indonesia – Papúa Occidental (Gobierno, rebeldes del GAM)	Cobre, oro	1969-actualidad
Papúa Nueva Guinea – Bougainville (Gobierno central, rebeldes del BRA)	Cobre, oro	1988-2001